



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 28 de julio de 2020.

Auto Interlocutorio No. 213

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE	76001-23-33-000-2019-00859-00
DEMANDANTE	JAIR ALBERTO MUÑOZ MARADIAGO
DEMANDADO	UNIVERSIDAD DEL VALLE
ASUNTO	RECHAZA DEMANDA POR NO SUBSANAR.

I. ANTECEDENTES

El señor JAIR ALBERTO MUÑOZ MARADIAGO, por medio de apoderado judicial, interpuso demanda¹ en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho contra la UNIVERSIDAD DEL VALLE, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo adiado el 13 de julio de 2018, mediante el cual se negó la aplicación del Decreto 1042 de 1978 y la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y cesantías.

Como restablecimiento del derecho solicitó se ordene a su favor la reliquidación y pago de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y cesantías.

TRÁMITE

Una vez revisada la demanda, se pudo establecer que en esta se omitió efectuar la estimación razonada de la cuantía, como lo exige el artículo 157 del CPACA. Esto es, explicando de dónde provienen los valores mencionados y tomando los últimos 3 años, teniendo en cuenta que se trata de prestaciones periódicas.

En razón a lo anterior, el despacho mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2019², le concedió a la parte actora el término legal para que razonara debidamente la cuantía, teniendo en cuenta solamente el valor de los emolumentos que pretende le sean incluidos, esto es, las diferencias entre lo que se le está pagando y lo que se debe pagar por los últimos tres años, por tratarse de una prestación periódica.

Según constancia secretarial visible a folio 35 del expediente, dentro del término legal concedido a la parte actora, para subsanar la demanda, no presentó escrito alguno.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

El numeral 2 del artículo 169 del CPACA se preceptúa, en relación con el rechazo de la demanda, lo siguiente:

¹ Ver folio 2.
² Ver folios 30-32.



"Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.
3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial."

Como quiera que del informe secretarial que antecede se constata que transcurrido el término legal la demanda no fue corregida, se procederá a su rechazo.

En relación con la estimación razonada de la cuantía, ha sido pacífica la postura de este Tribunal y del Consejo de Estado en señalar que el requisito de establecer razonadamente la cuantía tiene por objeto determinar la competencia del Juez y el procedimiento a seguir, aspectos que han de quedar definidos desde el comienzo de la controversia e allí que, con la finalidad de establecer la cuantía del proceso y, por ende, decidir sobre la admisibilidad de la demanda, el Juez debe tener en cuenta las pretensiones contenidas en dicho auto introductorio –junto con sus correcciones–, así como la estimación razonada de su cuantía, de ahí que este requisito en principio es meramente formal y no sustancial en cuanto a los requisitos propios de la demanda.

En el mismo sentido, este Tribunal ha defendido de forma reitera el principio *pro actione* en cuanto a apartar las barreras, en la medida de lo posible, para que las partes accedan a la administración de justicia. No obstante, tal garantía, como se indicó anteriormente, es con la venia de por lo menos la actuación y diligencia de las partes, situación que brilla por su ausencia en el dossier.

La parte actora tuvo la oportunidad de adecuar la demanda con una estimación razonada para establecer la competencia de este Tribunal; sin embargo, omitió dicha carga procesal dentro del plazo legal establecido, esto es, dentro de los 10 días dispuesto para la subsanación.

En tal sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-086 de 20163, precisó:

"[...] el proceso, como mecanismo a través del cual se materializa el derecho de acceso a la administración de justicia, inexorablemente conlleva la existencia de ciertas obligaciones de índole procesal o sustancial que la ley puede distribuir entre las partes, el juez o incluso terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos. Teniendo en cuenta que el ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, ello no es más que una concreción del mandato previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, según el cual son deberes de la persona y del ciudadano 'colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia'.

5.2.- La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recogida en varias ocasiones por la Corte Constitucional, ha establecido la diferencia entre deberes, obligaciones y cargas procesales, en los siguientes términos:

³ Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 167 (parcial) de la ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

2019-00859-00
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
JAIR ALBERTO MUÑOZ MARADIAGG
UNIVERSIDAD DEL VALLE



"Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.), otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6° del Código.

Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. "El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas". ("Fundamentos del Derecho Procesal Civil", número 130).

Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones: de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa". (Subrayado fuera del texto).

Una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo (a diferencia de la obligación procesal), de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización 'puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material'. En palabras ya clásicas, 'la carga funciona, diríamos, à double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés'.

5.3.- La Corte ha señalado en forma insistente que evadir el cumplimiento de las cargas procesales no es un criterio avalado por la jurisprudencia constitucional, 'en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger y llevaría por el contrario a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia'. Autorizar libremente el incumplimiento de las cargas procesales 'llevaría al absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando la propia culpa o negligencia', lo que desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional'. [...] (negritas y subrayas de la Sala)

En ese orden de ideas, la Sala considera que la presente demanda debe de ser rechazada al no haber sido subsanada dentro de la oportunidad legal y dejando por sentado que si bien, en principio, al operador judicial le corresponde establecer la competencia por razón de la cuantía conforme a los hechos y pretensiones de la demanda, en el caso sub-judice ni en el escrito petitorio, ni en la conciliación (fl. 13), ni en la petición del 2 de abril de 2018 (fl. 15 – 16) se puede inferir la cuantía de lo reclamado por la reliquidación de primas de servicio, navidad, vacaciones, cesantías y servicios prestados, pues no existe ningún documento en el que conste lo que le han pagado y lo que le deben por tal concepto a fin de establecer la cuantía y la competencia, ello sin olvidar la carga procesal de la parte actora para con el presente asunto, situación que

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

2019-00859-00
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
JAIR ALBERTO MUÑOZ MARADIAGO
UNIVERSIDAD DEL VALLE

4

ineluctablemente conlleva a rechazar la demanda dado i) lo contemplado en el numeral 2 del art. 169 del CPACA y además, ii) atendiendo la imposibilidad por parte de este Tribunal de establecer la cuantía de forma razonada, como lo contempla la norma (art. 162-6 ibídem)

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

- 1. RECHAZAR** la demanda instaurada por JAIR ALBERTO MUÑOZ MARADIAGO contra la UNIVERSIDAD DEL VALLE, por las razones expuestas.
- Ejecutoriado el presente auto archívese el expediente, previa anotación en el Sistema Siglo XXI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha (Acta virtual)

Los Magistrados,


OMAR EDGAR BORJA SOTO


ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


EDUARDO ANTONIO LUGO BARROS

SALVO VOTO

BO. TENDENCIA INNOVACION

VoBo. Secretario
ACH